



COSTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL CONFLICTO EN COLOMBIA

¿CÓMO CONSTRUIR UN POSCONFLICTO SOSTENIBLE?

*María Alejandra Arias
Adriana Camacho
Ana María Ibáñez
Daniel Mejía
Catherine Rodríguez
(compiladores)*

COSTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL CONFLICTO
EN COLOMBIA: ¿CÓMO CONSTRUIR
UN POSCONFLICTO SOSTENIBLE?

COSTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL CONFLICTO
EN COLOMBIA: ¿CÓMO CONSTRUIR
UN POSCONFLICTO SOSTENIBLE?

María Alejandra Arias

Adriana Camacho

Ana María Ibáñez

Daniel Mejía

Catherine Rodríguez

(compiladores)

Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible? / María Alejandra Arias... [et al.]. -- Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes, 2014.
268 pp.; 17 x 24 cm.

Otros autores: Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez, Román Andrés Zárate, Andrés Castañeda, Juan F. Vargas, Andrés Moya, Edgar Villa, Jorge A. Restrepo, Manuel Moscoso, Angelika Rettberg.

ISBN 978-958-695-998-8

1. Conflicto armado – Aspectos socioeconómicos – Colombia 2. Crecimiento económico – Colombia 3. Crimen organizado – Aspectos socioeconómicos – Colombia I. Arias, María Alejandra II. Camacho, Adriana III. Ibáñez Londoño, Ana María IV Mejía Londoño, Daniel V. Rodríguez Orgales, Catherine VI. Zárate Vásquez, Román Andrés VII. Castañeda, Andrés VIII. Vargas, Juan F. IX. Moya, Andrés X. Villa, Edgar XI. Restrepo, Jorge A. XII. Moscoso, Manuel XIII. Rettberg Beil, Beatriz Angelika XIV. Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de Economía. CEDE.

CDD 338.9861

SBUA

Primera edición: mayo de 2014

© María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía y Catherine Rodríguez (compiladores)

© Universidad de los Andes, Facultad de Economía

Ediciones Uniandes
Carrera 1.ª núm. 19-27, edificio Aulas 6, piso 2
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 3394949, ext. 2133
<http://ediciones.uniandes.edu.co>
infeduni@uniandes.edu.co

ISBN: 978-958-695-998-8
ISBN e-book: 978-958-695-999-5

Corrección de estilo: Adriana Forero
Diagramación interior: Andrea Rincón
Diseño de cubierta: Angélica Ramos

Impresión:
Editorial Kimpres Ltda.
Calle 19 sur núm. 69C-17
Teléfono: 413 6884
Bogotá, D. C., Colombia

Impreso en Colombia – *Printed in Colombia*

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

CONTENIDO

Introducción	19
<i>María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez</i>	
Características del conflicto armado y sus efectos sobre la salida de firmas	35
<i>Adriana Camacho, Catherine Rodríguez, Román Andrés Zárate</i>	
Conflicto armado en Colombia y producción agrícola: ¿aprenden los pequeños productores a vivir en medio del conflicto?	61
<i>María Alejandra Arias, Ana María Ibáñez</i>	
Hitos del conflicto y riesgo país	93
<i>Andrés Castañeda, Juan F. Vargas</i>	
Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano	117
<i>Adriana Camacho, Daniel Mejía</i>	
¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la población desplazada a una situación de pobreza crónica?	139
<i>Andrés Moya</i>	

Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para Colombia	181
<i>Édgar Villa, Jorge A. Restrepo, Manuel Moscoso</i>	
Encuentro con los otros: perspectivas para la reconciliación en Colombia	221
<i>Angelika Rettberg</i>	

ÍNDICE DE GRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

GRÁFICA 1.	Hectáreas de coca y desplazados	23
GRÁFICA 2.	Municipios con ataques de grupos armados	24

CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO ARMADO Y SUS EFECTOS SOBRE LA SALIDA DE FIRMAS

GRÁFICA 1.	Efecto promedio del conflicto sobre la salida de las firmas	51
GRÁFICA 2.	Efecto del conflicto armado por grupo que ejecuta el ataque	53
GRÁFICA 3.	Efecto del conflicto armado por nivel de concentración de ataques	54
GRÁFICA 4.	Efecto del conflicto armado por tipo de ataque	55

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: ¿APRENDEN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES A VIVIR EN MEDIO DEL CONFLICTO?

GRÁFICA 1.	PIB agrícola y presencia de grupos armados	65
GRÁFICA 2.	Ingresos agrícolas anuales reportados, por años de presencia	77
GRÁFICA 3.	Costos agrícolas anuales reportados, por años de presencia	77

HITOS DEL CONFLICTO Y RIESGO PAÍS

GRÁFICA 1.	Asesinato de Gaviria y Echeverri	102
------------	----------------------------------	-----

GRÁFICA 2.	Captura de Simón Trinidad	103
GRÁFICA 3.	Captura de Rodrigo Granda	104
GRÁFICA 4.	Liberación de Clara Rojas	105
GRÁFICA 5.	Muerte de Raúl Reyes	106
GRÁFICA 6.	Extradición de los jefes paramilitares	108
GRÁFICA 7.	Rescate de Íngrid Betancourt	109
GRÁFICA 8.	Masacre de los Awá	110
GRÁFICA 9.	Muerte del Mono Jojoy	111
GRÁFICA 10.	Muerte de Alfonso Cano	112

CONSECUENCIAS DE LA ASPERSIÓN AÉREA EN LA SALUD: EVIDENCIA DESDE EL CASO COLOMBIANO

GRÁFICA 1.	Cultivos de coca, aspersión aérea y erradicación manual, 2000-2010	120
GRÁFICA 2.	Impacto de la aspersión, el cultivo de coca y la erradicación sobre diagnósticos dermatológicos	131
GRÁFICA 3.	Impacto de la aspersión, el cultivo de coca y la erradicación sobre diagnósticos respiratorios	133
GRÁFICA 4.	Impacto de la aspersión, el cultivo de coca y la erradicación sobre abortos	134

¿PUEDEN LA VIOLENCIA Y LOS TRASTORNOS MENTALES CONDENAR A LA POBLACIÓN DESPLAZADA A UNA SITUACIÓN DE POBREZA CRÓNICA?

GRÁFICA 1.	Distribución de los trastornos emocionales	157
GRÁFICA 2.	Diseño de loterías	158
GRÁFICA 3.	Distribución de las decisiones durante el experimento	160
GRÁFICA 4.	Aversión al riesgo y tiempo transcurrido desde el desplazamiento	164

CRECIMIENTO ECONÓMICO, CONFLICTO ARMADO Y CRIMEN ORGANIZADO, EVIDENCIA PARA COLOMBIA

GRÁFICA 1.	Dinámicas de la violencia homicida y el conflicto armado	185
------------	--	-----

GRÁFICA 2.	Dinámica del secuestro y ataques unilaterales de la guerrilla	193
ENCUENTRO CON LOS OTROS: PERSPECTIVAS PARA LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA		
GRÁFICA 1.	¿Quién de los siguientes tiene más responsabilidad de la violencia que ha vivido Colombia en los últimos años?	234
GRÁFICA 2.	Pensando en las víctimas del conflicto, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?	235
GRÁFICA 3.	Pensando en las víctimas del conflicto, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?	236
GRÁFICA 4.	¿Cuáles de las siguientes afirmaciones que nos han dicho otras personas reflejan mejor su opinión sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia?	237
GRÁFICA 5.	Usted cree que la mayoría de personas que se beneficiarán con la ley de víctimas...	237
GRÁFICA 6.	¿Cree usted que el proceso de Justicia y Paz es...?	238
GRÁFICA 7.	¿Usted cree que el proceso de justicia y paz es?	239
GRÁFICA 8.	¿Cree usted que el país está avanzando en la dirección requerida para que se logre un proceso de reconciliación?	239
GRÁFICA 9.	Algunas personas creen que el paramilitarismo fue necesario en Colombia para combatir la guerrilla. ¿Usted personalmente está de acuerdo o en desacuerdo con esto?	240
GRÁFICA 10.	Actitudes frente a víctimas y perpetradores	241
GRÁFICA 11.	¿Aceptaría ser vecino de alguien que fue miembro de un grupo paramilitar?	242
GRÁFICA 12.	Actitudes frente a víctimas y perpetradores	242
GRÁFICA 13.	Análisis de conglomerados (<i>cluster analysis</i>)	244

ÍNDICE DE TABLAS

CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO ARMADO Y SUS EFECTOS SOBRE LA SALIDA DE FIRMAS

TABLA 1. Estadísticas descriptivas para la salida de firmas, conflicto y controles	41
TABLA 2. Estadísticas descriptivas para las características del conflicto	45

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: ¿APRENDEN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES A VIVIR EN MEDIO DEL CONFLICTO?

TABLA 1. Años de presencia de grupos armados (% de veredas)	73
TABLA 2. Incidencia de choques violentos por región, con y sin presencia de grupos armados (% veredas)	74
TABLA 3. Estadísticas descriptivas: variables de resultado	79
TABLA 4. Estadísticas descriptivas: controles (características del hogar)	80
TABLA 5. Estadísticas descriptivas: controles (características del predio y geográficas)	81
TABLA 6. Estadísticas descriptivas: controles (características veredales y municipales)	82
TABLA 7. Estimación MCO-uso del suelo: cultivos permanentes, cultivos transitorios y pastos (porcentaje del área del predio)	85
TABLA 8. Estimación MCO-uso del suelo: tierra sin usar (porcentaje del área del predio)	86

TABLA 9. Estimación PROBIT-inversión en el predio desde 2007	87
--	----

¿PUEDEN LA VIOLENCIA Y LOS TRASTORNOS MENTALES
CONDENAR A LA POBLACIÓN DESPLAZADA A UNA SITUACIÓN DE
POBREZA CRÓNICA?

TABLA 1. Características municipales: municipios de “tratamiento” y “control”	149
TABLA 2. Características de los participantes en los lugares de origen	151
TABLA 3. Exposición a la violencia	153
TABLA 4. Trastornos emocionales	154
TABLA 5. Distribución de los pagos asociados a cada lotería	156
TABLA 6. Desplazamiento y aversión al riesgo	162
TABLA 7. Violencia y aversión al riesgo	163
TABLA 8. Trastornos emocionales y aversión al riesgo	167

CRECIMIENTO ECONÓMICO, CONFLICTO ARMADO Y CRIMEN
ORGANIZADO, EVIDENCIA PARA COLOMBIA

TABLA 1. Fuentes y período de variables	192
TABLA 2. Estadísticas descriptivas de variables en niveles	194
TABLA 3. Estadísticas de variables logarítmicas utilizadas en las estimaciones	195
TABLA 4. Regresiones	200
TABLA 5. Verificación de hipótesis	201
TABLA A1. Prueba de exogeneidad estricta y cambio estructural en el gobierno de Uribe	217

ENCUENTRO CON LOS OTROS: PERSPECTIVAS PARA
LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA

TABLA 1. Regiones incluidas en la muestra	231
TABLA 2. Región y actitudes hacia la reconciliación	245
TABLA 3. ¿Hace parte de una organización de víctimas? Actitudes hacia la reconciliación	245

TABLA 4.	Situación laboral actual y nivel educativo más alto y actitudes hacia la reconciliación	246
TABLA 5.	Identificación con creencias y actitudes hacia la reconciliación	246
TABLA 6.	En su opinión, ¿quién de los siguientes tiene más responsabilidad de la violencia que ha vivido Colombia en los últimos años? – Actitudes hacia la reconciliación	247
TABLA 7.	¿Cree usted que –en las actuales condiciones de su región– el conocimiento de la verdad sobre lo que ha pasado con respecto al conflicto y las graves violaciones a los derechos humanos... (Actitudes hacia la reconciliación)	248
TABLA 8.	¿Cree usted que recordar públicamente los crímenes del pasado... (Actitudes hacia la reconciliación)	248
TABLA 9.	¿Reparar a las víctimas del daño que se les ha causado... (Actitudes hacia la reconciliación)	248
TABLA 10.	Regresión múltiple de factores que explican perspectivas para la reconciliación y actitudes ante víctimas y perpetradores	250

ÍNDICE DE MAPAS

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA:
¿APRENDEN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES A VIVIR EN MEDIO
DEL CONFLICTO?

MAPA 1. Presencia de grupos armados e incidencias de choques
violentos 76

CONSECUENCIAS DE LA ASPERSIÓN AÉREA EN LA SALUD:
EVIDENCIA DESDE EL CASO COLOMBIANO

MAPA 1. Concentración de campañas de aspersión aérea en
Colombia en 2006 119

¿PUEDEN LA VIOLENCIA Y LOS TRASTORNOS MENTALES
CONDENAR A LA POBLACIÓN DESPLAZADA A UNA SITUACIÓN DE
POBREZA CRÓNICA?

MAPA 1. Distribución geográfica de la muestra 146

INTRODUCCIÓN

*María Alejandra Arias
Adriana Camacho
Ana María Ibáñez
Daniel Mejía
Catherine Rodríguez*

El conflicto armado en Colombia ha impuesto costos económicos sobre el país y la población por más de cincuenta años. Si bien durante los últimos años se han llevado a cabo estudios para cuantificar algunos de estos costos, los esfuerzos han sido aislados y se han publicado en un lenguaje académico que restringe su difusión y discusión. Conocer y cuantificar los costos del conflicto es fundamental para identificar políticas públicas que los mitiguen y reduzcan, durante y después del fin del mismo. Esto, además de contribuir a diseñar procesos de restitución adecuados para las víctimas de la violencia, permitirá al país dinamizar su desarrollo económico y distribuir de manera más equitativa sus beneficios.

Tres son los objetivos de este libro. El primero es proveer evidencia adicional sobre los costos monetarios y no monetarios del conflicto en Colombia. Con este fin, se estimarán los costos desagregados para ciertos grupos de la población que están expuestos con mayor intensidad a la violencia, los costos agregados del conflicto en Colombia, y la disposición de la sociedad para emprender procesos de reconciliación y restitución a las víctimas. El segundo objetivo es dar ideas para un eventual proceso de posconflicto. Para ello, cada capítulo analiza los diversos costos del conflicto y discute potenciales políticas públicas que podrían ayudar a reducir dichos costos, así como contribuir a acelerar el ritmo de crecimiento económico y hacerlo más incluyente. El tercer objetivo es trascender las audiencias académicas para proveer un análisis riguroso en un lenguaje sencillo. Dado un posible acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es fundamental que las discusiones

antes y después de la firma de un potencial acuerdo tengan en cuenta los costos que ha significado para Colombia el conflicto armado. Esto no debe ser solo una discusión académica, ya que los efectos negativos de la violencia conciernen a toda la población. Unas políticas públicas bien diseñadas y que incorporen la evidencia provista por este libro contribuirán a un proceso de posconflicto más próspero y sostenible en el tiempo.

Esta introducción está compuesta por tres secciones. La primera sección hace un corto recuento cronológico del conflicto armado que no pretende discutir las causas de la violencia en Colombia ni analizar históricamente su devenir. En la segunda sección se discuten trabajos anteriores realizados en Colombia sobre los costos de la violencia, y en la tercera sección se describe la estructura del libro.

Breve recuento del conflicto armado en Colombia

Dos conflictos marcaron la historia colombiana durante el siglo xx. El primero se inició en 1948, con el asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán, el cual detonó el llamado *Bogotazo* y dio inicio al período de la historia colombiana conocido como *La Violencia*. Durante esta época, seguidores de los partidos políticos tradicionales, el Conservador y el Liberal, se enfrentaron de manera violenta en todo el territorio nacional, lo cual dejó como saldo un total de casi 200.000 muertos entre 1948 y 1953 (Guzmán, Fals-Borda et al. 1963; Sánchez y Meertens, 2001). Con el fin de terminar la violencia bipartidista, entre liberales y conservadores acordaron que se alternarían el poder y dividirían los cargos públicos por partes iguales. Este acuerdo se denominó el Frente Nacional y cubrió el período comprendido entre 1958 y 1974.

Si bien el Frente Nacional contribuyó a reducir la violencia bipartidista, la persistencia de factores estructurales como la desigualdad de ingresos, la debilidad institucional y las disputas de tierras atizó el surgimiento del conflicto presente en el país. Además, el Frente Nacional no generó espacios participativos para partidos de tendencias diferentes a las de los dos partidos tradicionales, lo cual llevó a la creación y posterior consolidación de grupos guerrilleros que se asentaron en diferentes regiones. En 1964, Marquetalia fue ocupada forzosamente por el ejército, lo cual produjo la reorganización de las guerrillas móviles y el posterior desplazamiento a Riochiquito (Vélez, 2001). A finales de 1965, se llevó a cabo la Primera Conferencia Guerrillera, en la cual nació el bloque Sur, y en 1966, durante la Segunda Conferencia Guerrillera, el grupo se constituyó oficialmente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

(FARC) (Pataquiva, 2009). Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se creó en 1962, como resultado de la Revolución Cubana. Un tercer grupo, el Movimiento 19 de Abril, conocido por la sigla M-19, surgió después de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1970. Estos nacientes grupos guerrilleros, que operaban en regiones aisladas del territorio utilizando ataques esporádicos, tenían una ideología política de izquierda muy marcada.

Contrario a los principales grupos guerrilleros del país, no existe un consenso acerca del origen exacto de los grupos paramilitares. El grupo Muerte a Secuestradores (MAS) es visto por algunos como una de las primeras manifestaciones del paramilitarismo en el país. El MAS se creó como respuesta al aumento de los secuestros, el robo de ganado y los cobros de extorsiones por parte de las guerrillas a terratenientes, ganaderos y narcotraficantes (Verdad Abierta, 2011).¹ Romero (2002) argumenta que los fallidos diálogos de paz con las FARC y el ELN durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, desencadenaron la creación de los grupos de autodefensas como una manera de proteger la población frente a los ataques guerrilleros. Duncan (2005 y 2006) aduce que los terratenientes formaron ejércitos privados de menos de 1.000 hombres con el fin de proteger sus intereses y sus propiedades de la extorsión y de las acciones violentas de los grupos guerrilleros. En otras regiones del país los grupos paramilitares ocuparon territorios que no tenían presencia de grupos guerrilleros, argumentando que esto prevendría su llegada. Sin embargo, estos grupos se dedicaron principalmente a actividades de narcotráfico.² Con el paso del tiempo, los grupos paramilitares pasaron de la defensiva a la ofensiva. Algunos se agruparon bajo un mismo mando y fue en 1997 cuando se consolidaron bajo una sola agrupación, conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las fuentes de financiación de los grupos ilegales en Colombia han sido múltiples: el secuestro, la extorsión, el pago de vacunas, la minería ilegal y el narcotráfico, entre otras. Pero son quizás las actividades de producción y tráfico de drogas las que han desempeñado el papel más importante en la financiación del conflicto armado colombiano, en especial en la época más reciente. Desde la época de los grandes carteles del narcotráfico (los carteles de Medellín y Cali), la producción de drogas ilícitas ha sido la principal fuente de financiación de los aparatos armados ilegales. Sin embargo, fue en 1994, cuando se dieron las políticas de interdicción imple-

1 www.verdadabierta.com, consultado el 7 de julio de 2012.

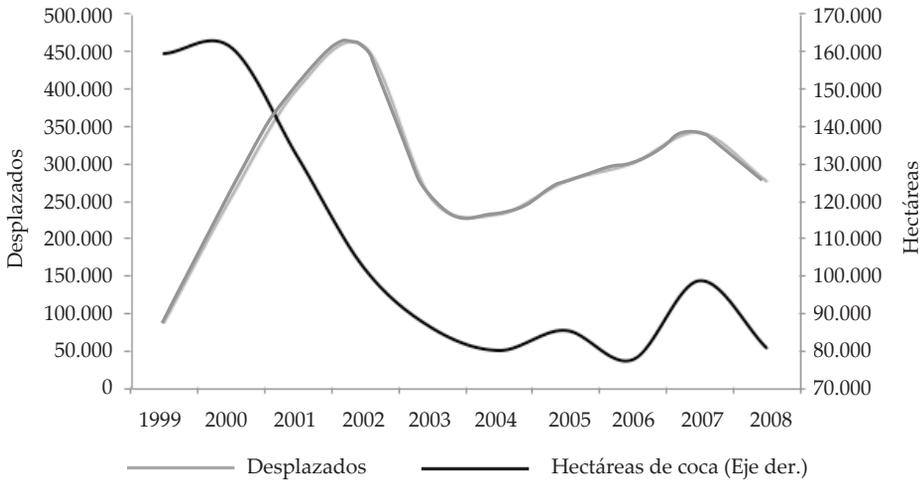
2 Agradecemos a un evaluador por resaltar esto.

mentadas exitosamente por el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, que en su gran mayoría se desplazaron hacia el territorio colombiano las actividades de producción y tráfico de cocaína. Paralelo a este proceso, las autoridades del país primero dismantelaron gran parte de la estructura criminal del cartel de Medellín y luego, las estructuras de los carteles de Cali y del norte del Valle. Este vacío que dejaron los carteles fue llenado principalmente por las FARC, quienes aprovecharon también la llamada zona de despeje, que se creó durante los diálogos de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, para organizar su estructura militar y vincularse de lleno en actividades de producción y tráfico de cocaína.

A lo largo de la historia reciente del país han existido unos vínculos muy estrechos entre los grupos armados ilegales y el narcotráfico. Esto no implica que no hayan existido otras fuentes de financiación, como el secuestro, la extorsión y la minería ilegal. La afirmación según la cual el narcotráfico ha sido la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales no solo se basa en recuentos históricos y anecdóticos, sino que esto también se observa al analizar los datos existentes sobre cultivos ilícitos y los lugares de operación de los grupos armados ilegales. Los trabajos que han tratado de desentrañar el efecto causal del narcotráfico sobre los niveles de violencia encuentran efectos robustos y significativos según los cuales el narcotráfico explica una parte muy importante de los índices de los principales indicadores de violencia en Colombia (véase, por ejemplo, Angrist y Kugler, 2008, y Mejía y Restrepo, 2013). El cultivo y la comercialización de coca agudizaron aún más la violencia, pues financiaron a los grupos armados e incentivaron su expansión territorial durante la segunda mitad de los noventa. La lucha por la tierra intensificó los combates, aumentó el número de víctimas civiles y generó desplazamiento forzado. La gráfica 1 muestra precisamente que existe una relación estrecha entre las hectáreas de coca cultivadas y el número de desplazados. En particular, se observa que las series se empiezan a mover de manera sincrónica a partir de 2002. Este hecho podría explicarse en dos direcciones. Es posible que los grupos al margen de la ley ataquen municipios donde existen hectáreas cultivadas con coca y que con sus acciones provoquen el desplazamiento de la población. Por otro lado, los grupos pueden atacar un municipio por otras razones, tales como ubicación estratégica o ausencia estatal, desplazando a la población para posteriormente sembrar coca usando a la población que apoya su causa.

Los grupos armados se expandieron de manera notoria durante las décadas en que ha estado vigente el conflicto en Colombia. Las FARC pasaron de tener siete frentes y 850 hombres en 1978 a tener 66 frentes y más de

GRÁFICA 1. Hectáreas de coca y desplazados

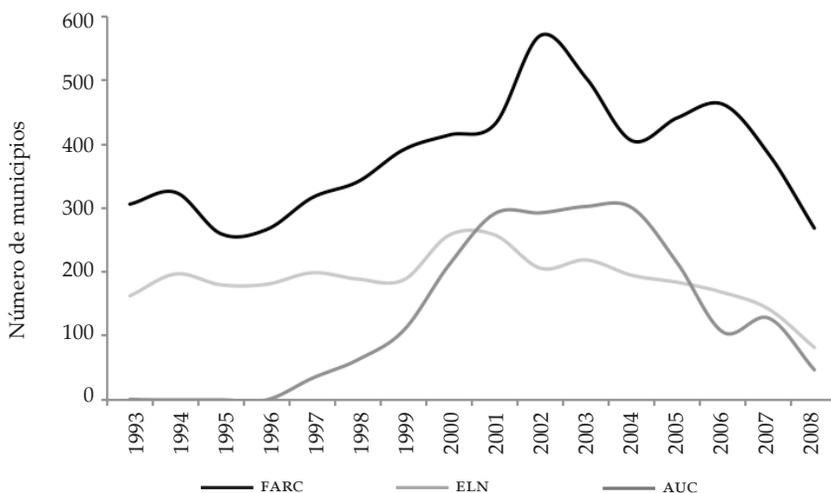


Fuente: cálculos propios con base en datos del Panel Municipal CEDE y SIMCI.

16.000 hombres en 2000. Hoy se estima que existen entre 8.000 y 10.000 hombres en las filas de las FARC. El ELN aumentó de 350 hombres en 1984 a 4.500 en 2000 (Sánchez, Díaz et al., 2003). De igual manera, las AUC pasaron de tener 1.200 hombres en 1993 a más de 10.000 en 2002 (Echandía, 2006). La gráfica 2 ilustra el número de municipios con ataques violentos de los grupos armados y muestra que la expansión llegó a su punto máximo en 2002.

Desde la década de los noventa, el Gobierno Nacional destinó importantes recursos a la lucha contra los grupos armados al margen de la ley. En primer lugar, se aumentó de manera sostenida el presupuesto destinado a las Fuerzas Militares desde 1990 hasta hoy. En segundo lugar, en 1999 se lanzó una iniciativa conjunta entre los gobiernos de Colombia y EE. UU., conocida como el “Plan Colombia”, cuyos principales objetivos eran combatir el narcotráfico (que ya era la principal fuente de recursos de las FARC) y recuperar amplias zonas del territorio colombiano que se encontraban bajo el control de este grupo guerrillero. A partir de 2002, la “Política de Seguridad Democrática” bajo el presidente Álvaro Uribe aprovechó este fortalecimiento para emprender una fuerte lucha contra los grupos guerrilleros. Los índices de violencia disminuyeron de manera muy significativa en los últimos doce años. Por ejemplo, de acuerdo con información de la Policía Nacional, la tasa de homicidios bajó de un nivel cercano a los 72 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2001 a un

GRÁFICA 2. Municipios con ataques de grupos armados



Fuente: cálculos propios con base en datos del Panel Municipal CEDE.

nivel cercano a 32 en 2012. La disminución de indicadores de violencia como los secuestros, la extorsión, los ataques a poblaciones, entre otros, también fue muy significativa.

El “Plan Colombia” redujo de manera importante los cultivos de coca en sus primeros años de operación, pero no así la producción potencial de cocaína ni las fuentes de recursos que obtenían los grupos armados ilegales como resultado de este negocio ilegal. Solo a partir de 2008, cuando se dio un cambio en la estrategia antidroga del país, comenzó a notarse una reducción importante en las estadísticas de producción potencial de cocaína en Colombia. El cambio de estrategia implicó una reasignación de prioridades, en donde se buscaba combatir más fuertemente los eslabones de la cadena que mayor valor agregado producen, como los laboratorios y los envíos de cocaína al exterior.

Bajo el primer mandato del presidente Álvaro Uribe se inició un proceso de negociación con los grupos paramilitares. El proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de las AUC empezó en 2003 y finalizó en 2006. Este proceso llevó a la desmovilización de más de 31.000 combatientes, que resultaron de 38 actos colectivos de desmovilización (Valencia, 2007). Sin embargo, el proceso de paz con los grupos paramilitares fue incompleto: algunos grupos no se desmovilizaron y otros dejaron sus estructuras militares casi intactas, pero operando bajo diferentes normas y con algunas modificaciones mínimas en sus estrategias. Ello, sumado a

los retornos que tienen las actividades ilegales en el país, conllevó la mutación de muchos grupos paramilitares hacia nuevas bandas emergentes, conocidas como las bandas criminales (bacrim). Sus principales actividades se concentran en el tráfico de drogas, la extorsión, el robo de tierras, la delincuencia común y la minería ilegal. Según la Fundación Nuevo Arco Iris,³ en 2009 había 82 estructuras criminales con presencia en 273 municipios. Además, la misma Fundación estima que de los 10.000 combatientes de estas nuevas estructuras criminales, 5.000 son desmovilizados de grupos paramilitares que están reincidiendo en el crimen.

A finales de 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició la negociación de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Después de un tiempo de contactos secretos, en octubre de 2012 comenzaron las negociaciones formales en La Habana entre un equipo del Gobierno y los dirigentes de este grupo armado ilegal. La discusión está centrada en cinco puntos neurálgicos: i) Política de desarrollo agrario integral, ii) Participación política, iii) Fin del conflicto, iv) Solución al problema de las drogas ilícitas y v) Víctimas. En diciembre de 2013, los dos primeros puntos habían sido negociados.

Costos del conflicto armado en Colombia

La violencia del conflicto armado ha dejado una estela de muerte y victimización de la población civil. Según el Grupo de Memoria Histórica (2013), en el período comprendido entre 1985 y 2013 murieron 220.000 personas por la violencia armada, de los cuales un 81,5 % eran civiles y un 18,5 % eran combatientes. Esto significa que una de cada tres muertes en Colombia es causada por el conflicto armado.

Sin embargo, la intensidad de la violencia no ha sido estable desde 1965 hasta hoy. El Grupo de Memoria Histórica (2013) identifica cuatro momentos de la violencia actual. Un primer período de violencia baja y estable sucede entre 1965 y 1981. A partir de 1982 y hasta 1995, el país enfrenta una tendencia creciente de la violencia, debido a la expansión de la guerrilla, el surgimiento de los grupos paramilitares y el fortalecimiento del narcotráfico. En el período comprendido entre 1996 y 2002, el fortalecimiento militar de la guerrilla, la expansión geográfica de los grupos paramilitares y el vínculo entre el narcotráfico y los grupos armados intensifican la violencia a niveles que se consideraron epidémicos en

3 <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/50-rearmados/1520-narcotrafico-extorsion-sicariato-y-robo-de-tierras-tendrian-afectados-a-25-departamentos-el-tiempo>, consultado el 7 de julio de 2012.

algunas ciudades como Medellín. Desde 2003 hasta hoy, la violencia cede tras la consolidación de la presencia militar en el territorio nacional, el repliegue de la guerrilla y la desmovilización de los grupos paramilitares.

El número de víctimas del conflicto armado no se limita a las personas asesinadas o muertas en combate. El Grupo de Memoria Histórica (2013) estima que entre 1985 y el 31 de marzo de 2013 se tuvieron 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños y adolescentes reclutados por grupos armados y 4.744.046 personas desplazadas. El número de personas secuestradas entre 1970 y 2010 fue de 27.023, y entre 1982 y 2012, 10.189 fueron víctimas de minas antipersonas. Ello implica que, para el período entre 1985 y 2012, cada hora fueron desplazadas 26 personas y cada doce horas fue secuestrado alguien. En el período de mayor intensidad de la violencia (1996 y 2005), cada ocho horas secuestraron a alguien y un civil o militar cayó cada día en una mina antipersona (Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Los costos económicos del conflicto en Colombia han sido enormes. El conflicto, además de tener costos derivados de la violencia por la destrucción de capital humano y capital físico, y el gasto en defensa, tiene costos que muchas veces son difíciles de cuantificar. Las primeras investigaciones al respecto en el país se basaban en metodologías de contabilidad que estimaban tanto los costos directos como los indirectos. Algunas de ellas, como los estimativos de Rubio (1997) y Trujillo y Badel (1997), sugieren que en total, el conflicto en la década de los ochenta y los noventa causó pérdidas anuales estimadas de 2 % y 4,5 % del producto interno bruto (PIB), respectivamente. Londoño (1998) estima que las pérdidas de capital humano ascienden a un 4 % del PIB.

La siguiente generación de estudios nacionales se concentró en los efectos del conflicto y la violencia en las tasas de crecimiento del PIB. A pesar de utilizar diferentes metodologías y distintos tipos de datos, las conclusiones de todos los estudios son bastante robustas en conjunto. Echeverry et al. (2001), Vargas (2003), Querubín (2003) y Cárdenas (2007), entre otros, estiman que el conflicto ha reducido la tasa de crecimiento del PIB entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales por año.

Estudios posteriores evaluaron los impactos microeconómicos del conflicto con el objetivo de entender las reacciones de los hogares y las empresas con respecto a la violencia, y las consecuencias de estos cambios en el comportamiento. Rubio (1997) estima que las inversiones de las familias para mejorar la protección de sus miembros y propiedades ascienden al 1,4 % del PIB colombiano. Gaviria (2004) aproxima las pérdidas de capital humano

por la migración internacional causada por el conflicto y encuentra que los emigrantes tienen al menos tres años más de escolaridad que los residentes en Colombia. De manera similar, Rodríguez y Villa (2011) demuestran que parte de esta migración de capital humano durante la década de los noventa es explicada principalmente por las altas tasas de secuestros selectivos que ocurrían en el país durante dicho período. Analizando otro tipo de migración, Ibáñez y Vélez (2008) calculan que el desplazamiento forzoso interno produce unas pérdidas de bienestar que equivalen al 37 % del valor presente neto del consumo agregado rural durante todo el ciclo de vida.

Estudios recientes han explorado otros canales a través de los cuales el conflicto impone costos sobre la ocupación, salud y educación de la población. Ibáñez (2008) encuentra que el desplazamiento forzoso ha ocasionado una pérdida de producción agrícola equivalente al 3,4 % del PIB agropecuario anual. Además, los hogares desplazados enfrentan muchas dificultades para recuperarse de las pérdidas económicas de la migración forzada y están inmersos, por ende, en una trampa de pobreza. Camacho (2008) estudia los impactos en la salud de los niños gestantes por el estrés que produce el conflicto armado en las madres embarazadas, medido por las explosiones de minas antipersonas en el municipio. Los resultados muestran un efecto significativo: los niños en gestación cuya madre estuvo en un municipio con explosión de minas antipersonas nacen con un menor peso (8,7 gramos en promedio). Rodríguez y Sánchez (2010 y 2012) estiman el impacto que ha tenido el conflicto en la acumulación de capital humano en el país. Los autores demuestran que el conflicto armado aumenta la tasa de deserción de los estudiantes, lo que implica que estos alumnos tendrán entre 0,6 y 1,2 años de educación menos de lo que alcanzarían en ausencia del conflicto. Más allá de este efecto en la reducción del número de años de educación, el conflicto también ha generado una reducción importante en la calidad de la educación que reciben los alumnos que permanecen dentro del sistema educativo.

Por otra parte, existen tres estudios nacionales recientes que analizan el impacto del conflicto en las decisiones empresariales. Rettberg (2008) describe cómo el conflicto armado afecta de manera directa e indirecta a las empresas colombianas, encontrando que tres cuartas partes de los empresarios encuestados aumentarían las inversiones en productividad, innovación y empleo en ausencia del conflicto. Pshisva y Suárez (2010) demuestran que los secuestros, ocurridos en los departamentos en los que operan, disminuyeron significativamente la tasa de inversión de las empresas durante la década de los noventa. Finalmente, Camacho y Rodríguez (2013) encuentran que el conflicto armado incrementa de manera importante la salida del mercado de empresas manufactureras.